



Ponencia

Coyuntura internacional y nacional:
Por la defensa de los derechos
laborales y la democracia social

Coyuntura internacional y nacional: Por la defensa de los derechos laborales y la democracia social

Los reajustes políticos a nivel global, regional y local, provocados por contextos de polarizaciones, amenazas imperiales, guerras y violencias crecientes, está impactando el papel que asumen y juegan los Estados, las sociedades y las comunidades u organizaciones sociales en todo el orbe. Las afectaciones en la devastación del medio ambiente, los territorios y sus recursos son graves e inocultables. Frente a un supremacista como Trump, el escenario se complica, pues los efectos de sus políticas golpistas, separatistas y criminales, ha sido muy poco lo que han hecho las naciones y sus instrumentos de posicionamiento y acción, como la ONU u otras instituciones multinacionales o regionales.

Algunos agenciamientos históricos como la resistencia palestina y la de las comunidades indígenas de los diversos continentes, continúan defendiendo dignamente sus territorios. Sin embargo, las repercusiones de la actual embestida imperialista, ya impactó la economía global y local; un proceso que podemos resumir en algunos aspectos claves:

1. Conflictos armados y su repercusión en los precios.

El escenario internacional de 2025–2026 está definido por una combinación de tensiones geopolíticas, interrupciones abruptas en cadenas de suministro y presiones inflacionarias debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente, que afectan directamente las condiciones de vida de los trabajadores en todo el mundo, incluidos los de la UAM.

2. El choque energético y el Estrecho de Ormuz

El conflicto entre Estados Unidos e Israel frente a Irán ha colocado al Estrecho de Ormuz (paso marítimo por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas licuado a nivel mundial) en una situación de parálisis operativa. Como consecuencia directa, el precio internacional del petróleo crudo superó los 100 dólares por barril, arrastrando consigo el costo de los combustibles a escala global.

Este incremento energético no opera de forma aislada: la energía es un insumo transversal a toda la economía. Su alza se transmite en cascada hacia el transporte, la electricidad, los servicios y fundamentalmente los alimentos, el costo de producción de prácticamente todos los bienes. Este fenómeno, conocido como “efecto de

segunda vuelta”, implica que la inflación generada en el sector energético se redistribuye por el conjunto del sistema económico, erosionando el poder adquisitivo de los salarios con independencia de su monto nominal.

Pues esta crisis generada por las altas oligarquías capitalistas del mundo, no la pagan ellos, sino termina siendo pagada por los bolsillos de los trabajadores, lo cual hace cada día más precario su salario.

3. Inflación importada: riesgo de navegación y comercio global

Los conflictos bélicos no solo impactan el precio del petróleo: también encarecen el comercio internacional. Cuando rutas estratégicas quedan bajo amenaza, se incrementan los seguros de guerra, los tiempos de entrega y los costos de transporte. Las aseguradoras globales han tenido que desarrollar coberturas especiales para mantener el flujo marítimo en zonas de conflicto, costos que inevitablemente se trasladan al precio final de las mercancías. El resultado es una inflación importada que golpea a economías como la mexicana con independencia de sus propias políticas monetarias o fiscales.

4. El problema de los fertilizantes y los alimentos.

Un efecto de particular gravedad es el que recae sobre la seguridad alimentaria. El cierre o la restricción severa del tráfico por el estrecho de Ormuz interrumpe el tránsito de insumos agrícolas, entre ellos una proporción relevante de los fertilizantes que circulan por vía marítima, lo que presiona al alza los costos de producción agropecuaria y, en consecuencia, los precios de los alimentos al consumidor final.

Este riesgo no es especulativo: el Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) registró en febrero de 2026 su primer repunte en varios meses, confirmando la sensibilidad del mercado ante la inestabilidad geopolítica. Para los trabajadores universitarios, cuyos salarios reales ya acumulan años de rezago, el encarecimiento de la canasta alimentaria representa una pérdida concreta e inmediata de su capacidad de consumo.

México: ni aislado ni inmune

Aunque México es un país exportador de crudo, importa una proporción significativa de sus combustibles en forma refinada. Esto lo expone directamente al alza internacional de precios. El propio gobierno federal y Pemex han reconocido que el encarecimiento externo está incidiendo en las decisiones de exportación y abasto, y se han visto obligados a mantener subsidios, estímulos fiscales y topes de precio a los

combustibles, precisamente para contener el impacto inflacionario sobre la población. Que el Estado intervenga activamente para amortiguar el golpe confirma que el riesgo es real, presente y políticamente reconocido. Sin embargo, estas medidas tienen límites fiscales y temporales.

Aunado a esto, para los países llamados “emergentes” como el nuestro, los retos se tornan complejos; por un lado, dada la necesidad de contener la constante presión del gobierno trumpiano y, por otro, por la obligación histórica de nuestro país de pugnar por la resolución consensuada de los conflictos mediante el diálogo y la consecución de acuerdos entre las regiones y las naciones implicadas. En este contexto, se vuelve fundamental que el Estado garantice una economía que no se vea afectada por las turbulencias financieras a nivel internacional, fomentando los diversos sectores productivos, las energías renovables y fortaleciendo con ello al empleo, así como los derechos a la salud y la educación, que se encuentran en una situación grave y de abandono a lo largo y ancho del país.

En cuanto a la vida política y los derechos de los trabajadores, los retos no son menores. Muchas de las instituciones que habían sido construido a lo largo de las últimas décadas, emanadas de luchas democráticas y sociales, han sido desmanteladas o acosadas, enmarcadas en entornos cada vez más violentos y de inseguridad, lo cual afecta a todas las organizaciones populares, los liderazgos sociales y las comunidades urbanas o rurales. Con la reforma laboral del sexenio anterior, los trabajadores han visto disminuidos sus derechos laborales y organizativos, así como sus posibilidades de recuperación salarial o ascenso social, incluidas las rutas legales de emplazamiento a huelga. Las políticas de bienestar a sectores desprotegidos, si bien tienden a contener los altos niveles de pobreza propiciados por los regímenes neoliberales, han provocado que el salario general siga padeciendo un declive real, pues los aumentos salariales solo han impactado al salario mínimo, pero no a los trabajadores bajo el régimen contractual, como ocurre con las universidades públicas. En ausencia de un incremento salarial que reactive el poder adquisitivo de los trabajadores, los mecanismos de contención gubernamental resultan insuficientes para preservar el nivel de vida de quienes dependen de un salario fijo, como en el caso de la UAM.

Las rutas posibles para el SITUAM

El sindicalismo democrático, como el que representa el SITUAM, requiere reforzar su independencia del estado y los partidos políticos, agrupar fuerzas, renovar sus procesos de discusión y deliberación, apuntalar sus demandas y luchas frente a las

presiones federales y al mismo tiempo frente el acoso que proviene de la patronal, que ha emprendido el levantamiento indiscriminado de actas bajo el pretexto de la “inseguridad” o el “acoso” en los espacios de la Universidad.

Para el SITUAM, este contexto internacional no es un contexto ajeno a la negociación: es el argumento central que justifica la urgencia de un incremento salarial real. Cuando los precios de energía, transporte, salud, vivienda, recreación y alimentos suben por razones externas e incontrolables, la defensa del salario se convierte en la primera línea de resistencia del movimiento sindical universitario organizado.

Uno de los elementos más preocupantes para el sector universitario es la continuidad de una política presupuestal restrictiva hacia las instituciones de educación superior públicas. Desde hace varios años, las universidades autónomas han enfrentado recortes reales en sus subsidios así como de recortes presupuestales, situación que no se ha revertido con el cambio de administración, por el contrario la educación y la salud se ven cada día más precarizados y han generado una enorme deserción de estudiantes de su formación profesional.

La UAM, como organismo descentralizado del Estado, depende en lo fundamental del Gobierno Federal para sostener su operación, su planta laboral y sus compromisos contractuales. Cuando ese subsidio crece por debajo de la inflación, la universidad enfrenta una disyuntiva que invariablemente recae sobre los trabajadores: o se contienen los incrementos salariales, o se deterioran las condiciones generales de operación institucional. En cualquiera de los dos escenarios, somos los trabajadores quienes absorben el costo de una política de austeridad que jamás aprobamos.

Este mecanismo de transferencia del ajuste fiscal hacia los trabajadores universitarios es precisamente el que el SITUAM tiene la obligación histórica de denunciar y resistir en cada proceso de negociación.

Frente a las tendencias hacia la centralización, la poca transparencia y el autoritarismo en la vida política a nivel nacional y local, es fundamental promover acciones y confluencias con transparencia, espíritu democrático, claridad de principios, así como apertura hacia el diálogo y la propuesta de caminos viables para la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo, prevaleciendo siempre nuestra autonomía y nuestras demandas frente a las corrientes políticas que hoy dominan el escenario en el país. Quienes han dado muestra de votar sin consultar a ningún ciudadano las políticas de austeridad de recortes en salud, educación y otros rubros sociales.

Es importante, también darnos una política de alianzas y unidad con el resto de los trabajadores de México principalmente con las organizaciones sindicales universitarias, dejando de lado el sectarismo en el que hoy sobreviven las distintas corrientes a nivel nacional, y llamar fuera de toda demagogia barata la acción conjunta de un plan nacional de resistencia frente al acoso capitalista que hoy empobrece cada vez más a la vida de los trabajadores. Hagamos un llamado a la acción a la unidad y a la solidaridad entre trabajadores, construyamos un gran movimiento nacional que ponga freno a las políticas gubernamentales en las que hoy están disciplinados la mayoría de los sindicatos oficiales, creemos que es posible llegar acuerdos, sellar alianzas y caminar juntos en las calles, levantando nuestras banderas de lucha, construyamos un frente con la clase obrera y los trabajadores de la ciudad y el campo, solo así y de ninguna otra manera podemos ser vistos y escuchados.

“Por la unidad en la Lucha Social”

